

15 de octubre-28 de marzo: Balance y perspectiva

Con las elecciones del 28 de marzo de 1982 concluye provisionalmente el proceso iniciado el 15 de octubre de 1979. Durante este período, uno de los más intensos de la historia de El Salvador, han sucedido muchas cosas graves, pero todas ellas pueden resumirse en una realidad: la terrible guerra civil que ha trastornado de arriba a bajo la estructura del país y ha producido dramáticos resultados. No es que el proceso haya concluido con el acto formal de las elecciones, ni siquiera con la instauración de la Asamblea Constituyente y del gobierno provisional. Ambos sucesos son transitorios, pasos intermedios para una nueva andadura; pero, además, son sucesos que no han dado fin al problema fundamental de El Salvador, tal como se manifiesta de forma más aguda y significativa en la guerra civil. Sin embargo, aunque el período y el proceso no han concluido definitivamente, han tomado otra forma. Esto permite y exige echar una mirada atrás, no con el ánimo de condenar, sino con el empeño de encontrar soluciones. Sería una falta de responsabilidad imperdonable el que los dirigentes del país, sean políticos, militares, empresarios, revolucionarios, religiosos o intelectuales, no se pusieran a analizar estos dos años y medio para, tras un estudio serio, proponer vías de salida a una situación intolerable.

Nuestra Revista quiere ayudar a este examen de conciencia nacional, como lo ha hecho en casos similares. Para ello ha reunido una serie de estudios que tocan algunos de los puntos principales configuradores del proceso. Son, sobre todo, materiales para el examen y la reflexión. No abarcan todo lo ocurrido, pero sí algunos elementos significativos. Lo hacen con honestidad y, así lo pensamos y deseamos, con objetividad. Al menos están escritos, reconocida su provisionalidad, con independencia de criterio universitario, con arduo trabajo, con amor al pueblo salvadoreño y con decidida voluntad de que el país se en-

camine rápidamente en la búsqueda y encuentro de soluciones seguras y verdaderas. Pensamos que quienes tienen responsabilidad sobre la marcha del país deberían hacer algo similar. Entonces, desde un serio contraste de opiniones, donde prive la reflexión sobre la pasión, podrán buscarse y encontrarse soluciones nacionales, que reflejen la realidad de los hechos y las necesidades objetivas; salidas, al menos, que ayuden a sacar a El Salvador de la desesperada situación donde se encuentra.

Porque desesperada, dramática, e inaceptable es la situación del país. No lo era tanto antes del 15 de octubre, aun cuando los problemas de fondo ya estaban presentes entonces. Durante estos dos años y medio El Salvador ha ido empeorando de día en día. Los treinta y cinco mil muertos, la inmensa mayor parte de ellos víctimas de la represión; los cerca de quinientos mil desplazados de sus lugares de origen, muchos de ellos en el extranjero y en campos de refugiados; la ruina de la economía nacional afectando más y más a la población, especialmente a los de menores recursos que son los más, en forma de paro creciente, de congelación de salarios y elevación de precios; la vida política y social en permanente estado de excepción, sea por decretos y leyes que impiden el disfrute de derechos constitucionales, sea por el peligro permanente que amenaza a todos; la sistemática, masiva e impune violación de los derechos humanos... Pero sobre todo el estado de guerra, la cual va más allá de los combates militares hasta invadir toda la vida del país, desde el presupuesto nacional a la rutina de los cateos, de los retenes, de las bombas, de los apresamientos, de las quemaduras, de los desaparecidos. Para qué repetir una vez más la larga letanía dolorosa de nuestros males. Y, junto a ella, la falta de dignidad nacional, la pérdida de la soberanía, entregada en importantes sectores a países extranjeros, especialmente a Estados Unidos. Casi todo ha ido a peor en los dos últimos años. Ni siquiera las reformas y las elecciones pueden estimarse como completamente positivas, porque después de ellas muy poco ha cambiado. La guerra sigue más fuerte y extendida; la represión ha podido descender cuantitativamente algo, pero el aparato represivo sigue igual y, en cualquier momento, puede volver a ponerse en pleno rendimiento.

El Presidente Reagan podrá certificar ante el Congreso que ha habido progresos en la institucionalización democrática, en el respeto de los derechos humanos, en la prosecución de las reformas, en la investigación judicial de los norteamericanos asesinados en nuestro país. Pero esto no es realmente así. Sabemos que lo mostrado como avance no toca lo principal de nuestra tragedia y sabemos, además, que por ese camino y a esa velocidad, no

saldremos de nuestros problemas.

Retengamos, pues, que la situación actual es probablemente la peor y más grave que ha sufrido El Salvador en toda su historia. Decidámonos a trabajar para salir de ella. Pero para hacerlo por el buen camino, reflexionemos desapasionada y profundamente sobre los pasos dados en estos últimos años. De esa reflexión podremos concluir al menos qué pasos no deben seguirse dando, pues han demostrado ser malos y costosos en sí mismos y, además, inútiles o contraproducentes para resolver los problemas del país. Tras esta reflexión, tras ver cómo y por qué el país ha llegado a la postración en que se encuentra, podremos concluir que algo radicalmente nuevo ha de emprenderse, ya que nuevas variaciones de lo mismo nos llevarán a hacer todavía más desesperada nuestra situación.

Nuestra reflexión nos ha llevado a identificar tres grupos de tareas fundamentales, en las cuales debe enmarcarse urgentemente la actividad del país: a) pacificación; b) democratización, c) reconstrucción. Pero debemos explicar qué se entiende por cada una de ellas, pues no bastan las palabras o con las mismas palabras pueden decirse cosas sensiblemente distintas.

a) Pacificación

El país están en guerra, y aunque no todo el país participa activamente en ella, sí lo hacen las fuerzas más poderosas en capacidad de destrucción. Esto hace que la guerra lo invada todo y lo empeore todo. No es entonces exagerado decir que si los salvadoreños no terminamos con la guerra, la guerra va a terminar con El Salvador.

Cuando hablamos de la guerra en El Salvador no hablamos sólo de las acciones militares y paramilitares, donde han muerto ya varios miles de combatientes; ni hablamos sólo de los cientos de millones de colones del presupuesto nacional y de créditos extranjeros invertidos en ella, hasta hacer de nuestra economía una economía de guerra. Hablamos también de la represión que causa decenas de miles de víctimas, centenas de miles de desplazados. Hablamos de un estado de guerra que prácticamente ha dividido en dos la geografía nacional, dislocando el conjunto de las actividades políticas y sociales. Hablamos de una economía abocada al desastre casi total y difícil de levantar por la destrucción, inseguridad y falta de recursos disponibles para la paz. Hablamos de una polarización de los ánimos por la que miles de salvadoreños vean en otros miles de salvadoreños a sus enemigos irreconciliables, quienes deben ser aniquilados cuanto antes para no ser aniquilados por ellos. Hablamos de una descomposición

del aparato de seguridad del Estado, en la cual es habitual el que sea la ley de la selva o, lo que es peor, la ley de la arbitrariedad, la que rija las listas de la muerte, de las detenciones, de los desaparecimientos. Hablamos también de una guerra, en la cual ya no se solventan sólo problemas nacionales, sino también intereses de grandes potencias, especialmente el interés de Estados Unidos por no ver complicada su seguridad nacional.

Si queremos pacificación debemos terminar con todo lo anterior y no con la aniquilación de una de las partes en lucha. Y con esta guerra hay que terminar no militarmente sino pacíficamente. Pretender el final de la guerra por vía de la militarización, del guerrerismo, es agravar los problemas nacionales y regionalizar el conflicto. Por parte y parte hay todavía recursos, energías y voluntad de combate para un largo tiempo, que ha de medirse por años y no por meses. Los cálculos más optimistas por parte del gobierno y de los asesores norteamericanos dan que el país no podrá ser pacificado antes de 1984, después de haber invertido en la aniquilación del FMLN cientos de millones de dólares, dejando tras de sí miles y miles de muertos y un país asolado; los cálculos de sus contrarios también apuntan a 1984 cuando las cosas serán más fáciles, porque para entonces ya se habrá demostrado la incapacidad de la Fuerza Armada para acabar con la guerrilla y de la política de la Administración de Reagan para terminar con el foco de agitación y rebeldía, que supone para ellos el pequeño territorio de El Salvador.

Debe buscarse, por tanto, una forma política para terminar con la guerra y debe encontrarse cuanto antes. Y esto no se puede conseguir sin alguna suerte de diálogo y negociación entre las partes beligerantes. Lo acaba de afirmar, por fin, la Conferencia Episcopal de El Salvador, la cual hasta ahora era reacia en su conjunto a emprender la vía del diálogo con el FMLN: "por eso mismo exhortamos a todas las partes involucradas en el conflicto a que, abandonando toda postura irreductible, se abran a un diálogo sincero, claro, leal, animado de buena voluntad y de un espíritu de auténtico patriotismo, poniendo por encima de los intereses particulares o de grupo, la unión de la familia salvadoreña" (Mensaje Pastoral, 15 de Julio de 1982). Testimonio tanto más interesante cuanto que la misma conferencia abogó en su día por las elecciones como principio de solución. A la pregunta retórica lanzada por el Ministro de Defensa de quiénes han de dialogar, la Conferencia Episcopal ya ha dado su respuesta: "todas las partes involucradas en el conflicto", por tanto, la Fuerza Armada, la empresa privada, los partidos, el FDR, el FMLN. Es sofístico decir que no se quiere dar poder a quienes no lo supieron conquistar en el campo de batalla o en proceso

electoral. Muchos que han tenido y tienen poder hoy en El Salvador no lo consiguieron en el campo de batalla ni en las urnas electorales; por otro lado, el FMLN se ha convertido evidentemente en una fuerza, que ha conquistado un notable poder, suficiente para hacerse sentir en el interior del país y para hacerse escuchar en los foros internacionales.

Sin embargo, lo que las partes beligerantes deben dialogar y negociar no es necesariamente el poder del Estado. Antes de eso pueden dialogar y negociar otros puntos importantes para la pacificación del país, desde los referidos al proceso de democratización hasta los pasos previos para una finalización gradual de las acciones militares, pudiendo llegar hasta la negociación de las condiciones mínimas para unas elecciones libres. Cuando el nuevo Secretario de Estado Norteamericano afirma que no aconsejará negociaciones con la guerrilla, puede estar significando que no las va a favorecer, si ello se refiere inmediatamente a la participación en el poder; cuando, por su parte, el Subsecretario para Asuntos Interamericanos habla de que, después de las elecciones, podría avanzarse en formas de diálogo, puede estarse refiriendo a diálogos parciales y paulatinos.

b) Democratización

También sobre la necesidad de democratización parece haber un amplio consenso nacional. Pero es importante definir en qué consiste esta democratización, cuando aquí la proponemos como tarea fundamental.

La democratización implica, por lo pronto, una politización del proceso y, consiguientemente, su desmilitarización. No basta terminar con el belicismo se debe terminar también con el militarismo. El militarismo es, en general, un vicio de los países subdesarrollados y consiste en que el estamento militar tenga un peso en la conducción política de la nación que de ningún modo le corresponde ni por mandato constitucional ni por las características intrínsecas de la institución militar. No porque tenga en sus manos la fuerza de las armas o porque en raras ocasiones exponga su vida en defensa de los intereses de la patria, el estamento militar no tiene la capacidad ni la legitimidad para imponer su voluntad a la mayoría de la población; no tiene tampoco la exclusiva del patriotismo ni de la clarividencia política. Los estrepitosos fracasos de los militares argentinos, chilenos y bolivianos, para poner sólo ejemplos lejanos, en la conducción política, económica y aun militar de sus respectivas naciones deben abrir los ojos a nuestra institución armada; los ejemplos más próximos de Honduras, Guatemala y El Salvador, en épocas bien recientes, deben servir pa-

ra algo.

Se debe respetar, sin duda, la institucionalidad del ejército, pero un modo de hacerlo es ateniéndose estrictamente a lo que la institución puede dar de sí según las leyes y según su formación castrense. Pero más que la institucionalidad se debe respetar la constitucionalidad del ejército: se debe lograr un ejército realmente constitucional, esto es, un ejército que respete escrupulosamente la constitucionalidad del país, donde el poder no está en la Fuerza Armada, sino en el poder legislativo, en el poder judicial y en el poder ejecutivo, y esto no de una manera meramente formal, sino de una manera real, lo cual no ha ocurrido en nuestro país desde hace más de cincuenta años. Para ello hace falta un rearme moral de nuestra Fuerza Armada, una restauración moral del estamento militar. Es necesario y es posible: es necesario, porque mientras Jefes y oficiales no se eduquen en una nueva forma de ser y de comportarse, estarán a merced de intereses espúreos necesitados de la corrupción y del desprestigio de los militares; y es posible, porque el ejército salvadoreño en algunas ocasiones ha dicho con suficiente autenticidad que no quiere seguir siendo el brazo armado de la oligarquía, sino el respaldo armado de la voluntad popular y de la nación como un todo, como fue el caso de la Juventud Militar quien demostró el 15 de octubre que no todo estaba podrido en el ejército, que había voluntad de cambio, que había en él reservas de honor, valor militar y moralidad política y sincero amor al pueblo.

Este aspecto de la desmilitarización también compete al FMLN, en cuya dirigencia y actividad principal debe pasar de los comandantes guerrilleros y acciones bélicas a las instancias políticas y a la organización de masas. Lo militar sigue siendo importante, pero el FDR-FMLN no tienen por qué caer en desviacionismos militaristas, que impidan la manifestación de la voluntad popular y dificulten una auténtica soberanía popular.

La democratización implica también, sobre todo en nuestro caso particular, un pleno respeto a los derechos humanos, especialmente a los derechos consagrados de la Constitución y en las leyes de la República. El derecho a la vida y a la libertad de todos los ciudadanos, como valores fundamentales ante los que cualquier otro valor debe ceder. No hay democracia sin vida y libertad. Para nosotros será solución democrática la que termine con la violación de los derechos humanos, esa violación sistemática, continuada y masiva, por la cual hemos sido advertidos por las Naciones Unidas y por la cual la OEA ha hablado de un terrorismo de Estado ¿Cómo hablar de democracia en estas condiciones? En ese sentido, la democratización exige un sane-

amiento de todos los responsables de la represión, sobre todo de los responsables enquistados en el poder, especialmente en el poder militar. Si sigue organizado el aparato de la represión, no puede trabajarse por la democracia en el país.

La llamada a la democratización en este sentido alcanza también al FMLN, quien debe mostrar con hechos reales su voluntad anunciada de negociar, de terminar lo antes posible con medidas de fuerza, especialmente con el sabotaje económico y con lo que pudieran ser formas estrictas de terrorismo. Es cierto que al comparar su conducta con la de sus adversarios en este campo de la violencia represiva el FMLN sale muy favorecido. Es cierto también que su oferta de negociación conlleva el término inmediato de acciones violentas. Es cierto que ha dado pruebas evidentes de humanidad con los prisioneros capturados en acciones militares. Pero hay otras acciones de difícil comprensión para el pueblo y que no son conciliables con la necesidad de democratización.

La democratización, por otra parte, en un sentido más estricto, implica la apertura del espacio político, de modo que todos los ciudadanos puedan participar en los destinos públicos de la patria. Empieza por la definición y puesta en marcha de un marco jurídico constitucional, donde se respeten los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, se acomode a nuestra circunstancia y defina las reglas del juego político; incluya la posibilidad legal y real de organizarse, movilizarse y expresarse en partidos políticos, sindicatos y toda suerte de organizaciones; necesita un poder judicial saneado, capaz e independiente, al que puedan recurrir con seguridad y efectividad los ciudadanos para reclamar que se les haga justicia; posibilita un sistema de medios de comunicación social en el que hay una libertad real de prensa y de otros medios para que todas las fuerzas puedan hacerse oír equitativamente; prepara en el momento oportuno la manifestación de la voluntad popular en orden a elegir sus representantes locales y nacionales, pero de modo que la elección no sea formal sino verdaderamente real dentro de una justa igualdad de oportunidades.

Tenemos que reconocer que estamos muy lejos de una democratización así entendida. Las elecciones del 28 de marzo no han sido el resultado de una democratización previa ni pueden llevar por sí solas a una plena democratización. En la Asamblea Constituyente no está representada toda la nación y, consiguientemente, no se dan las condiciones para que la próxima Constitución responda efectivamente a un consenso nacional. Puede sí ser un comienzo de democratización, en cuanto la amplia parte de población representada en la Asamblea Constituyente puede

delegar en sus diputados la tarea de pacificación a través de diálogos y negociaciones, significando con eso su no a la violencia; puede impulsar medidas democratizadoras tales como la suspensión del Estado de sitio, del decreto 507, la promulgación de una amnistía para los presos políticos, la apertura de la Universidad Nacional; puede preparar unas elecciones con posibilidad real de participación con plenas garantías para aquellas fuerzas sociales, que no las tuvieron el 28 de marzo. Todo ello es algo difícil de conseguir, pero algo al mismo tiempo por lo que merece la pena de empeñarse con todas las fuerzas.

c) Reconstrucción nacional

También en este punto hay consenso general. Se reconoce que la situación económica del país es alarmante por lo mucho destruido, por lo mucho abandonado, por lo mucho dejado de hacer o mal hecho; se reconoce que las necesidades actuales e inmediatas del pueblo salvadoreño son gigatescas y se van a multiplicar en los próximos años; se reconoce, por tanto, la necesidad de un esfuerzo extraordinario para recuperar la economía y relanzarla cuanto antes. Lo que ya no se reconoce tan unánimemente es que todo ello no es posible sin acabar cuanto antes la guerra y sin llegar a un consenso nacional sobre el marco general en el cual se desarrollará el proceso económico nacional.

Hay todavía quienes piensan en la posibilidad de volver al pasado, a un presunto liberalismo económico, que no sólo no logró desarrollar el país respondiendo el crecimiento económico a las necesidades de todos los salvadoreños, sino que fue el responsable último de la injusticia estructural e institucionalizada, que encendió el fuego del movimiento revolucionario. Hay

Casi todo ha ido a peor en los dos últimos años. Ni siquiera las reformas y las elecciones pueden estimarse como completamente positivas, porque después de ellas muy poco ha cambiado. La guerra sigue más fuerte y extendida: la represión ha podido descender cuantitativamente algo, pero el aparato represivo sigue igual y, en cualquier momento, puede volver a ponerse en pleno rendimiento.

todavía quienes pretenden imponer su interés de clase minoritaria sobre el interés común. Quienes piensan así olvidan que todo ello ha dado paso a una guerra civil, una guerra en la cual no son vencedores y que, por tanto, no les garantiza ni siquiera el poder imponer por la fuerza sus pretensiones.

Hay, por otra parte, quienes piensan que el reformismo iniciado el 15 de octubre es el camino adecuado para apagar los revolucionarismos en un primer momento y para transformar y relanzar la economía después. Los meses pasados, por sus especiales circunstancias, no han permitido al reformismo mostrar lo que puede dar de sí. Echado a andar en circunstancias sociales adversas, atacado fuertemente y aun boicoteado por el llamado sector productivo, mal preparado y gestionado técnicamente, el reformismo ha quedado en el papel o en formas muy parciales de realización.

No hay consenso entre unos y otros y, menos aún, con las fuerzas aglutinadas en el FDR-FMLN. Por ello la reconstrucción necesita también de un diálogo negociador, que lleve a un pacto aceptable para todas las partes, en el que todas cedan y en el que todas ganen. Se debe pactar un marco económico general, dentro del cual se puedan ubicar las partes en conflicto. Las líneas generales de ese marco económico ya han sido propuestas en sucesivas y progresivas declaraciones del FDR-FMLN: economía mixta delimitando bien las competencias del Estado y el espacio de la empresa privada; reconocimiento de la necesidad del aporte y capacidad de la empresa privada nacionalista y progresista, sin la cual no es posible la recuperación, y por lo cual le deben ser reconocidos y garantizados los beneficios justos de su inversión y esfuerzo. Más difícil es encontrar unanimidad en los representantes hegemónicos de la empresa privada, incluso para iniciar el diálogo y el pacto social. De todos modos, entre los distintos programas de parte y parte y, sobre todo, entre las prácticas tradicionales de unos y de otros hay un gran abismo, que sólo un diálogo realmente nacional fijado en leyes y estructuras confiables podrían reducir. Y si no se llega a un acuerdo suficiente, se deben dejar abiertos los medios para que el disenso no se convierta en boicot absoluto o en lucha destructora. El país no está para más destrucción ni la lucha de intereses tiene por qué tomar la misma forma adoptada hasta ahora.

Desde luego, no es posible la recuperación y, menos aún, la reconstrucción sin la terminación de la guerra y una terminación política, no violenta. Ni tampoco sin una incipiente democratización. Una aparente recuperación económica por la vía fácil de la incentivación exagerada del sector privado tam-

poco conducirla a la reconstrucción económica y social. Por todos lados vuelve a presentarse la misma coincidencia: se debe lograr una decisión política consensuada, en este caso, sobre el tipo de economía que va a tener el país, no porque se imponga a la fuerza, sino porque es la más conveniente para los salvadoreños y porque responde mejor a lo que ha motivado la crisis de los últimos años. No se trata de una discusión ideológica abstracta sobre las ventajas e inconvenientes de un capitalismo o de un socialismo teórico; se trata de una negociación a partir del discernimiento lúcido de las causas de nuestros males y de las posibilidades reales de solución. También es urgente, aunque menos importante, un estudio técnico sobre la situación real de la economía salvadoreña y sobre el modo de relanzarla para poder responder lo más pronto posible, a las necesidades ingentes del país. Nos esperan años muy difíciles, años de emergencia nacional, pero estos años serán más difíciles y largos, cuanto más adelante vaya la destrucción, cuanto más tardemos en negociar una solución política y una solución económica.

Si quisiéramos unificar estas tareas en un quehacer fundamental, aunando el esfuerzo nacional, deberíamos hablar de una re-humanización del país. El Salvador se ha deshumanizado hasta límites increíbles en los últimos años. La deshumanización había comenzado con una solapada, pero constante y profunda violación de los derechos humanos, aun de aquellos derechos garantizados por la Constitución; la deshumanización subió de grado cuando a la justa protesta de un pueblo organizado se respondió con tal represión sistemática, que llegó a escandalizar al mundo; la deshumanización sigue su curso hoy día a causa del lugar central que ocupa en nuestro proceso histórico actual la guerra sobre todo en sus formas más sucias y crueles. No negamos que en este proceso se han despertado nuevas y profundas virtudes, que han llevado hasta el heroísmo de dar la vida por los demás y al heroísmo de arriesgarlo y dejarlo todo para que el pueblo llegue a tener lo que le corresponde en justicia; no negamos que en este proceso una gran parte del pueblo se ha concientizado y organizado, convirtiéndose así en la gran reserva moral de una forma nueva de humanización. Y, sin embargo, la deshumanización lo invade todo. Por eso es tan indispensable la rehumanización, la cual implica, por lo pronto, la deshumanización cuanto antes y borrar sus causas y procedimientos. Exigencia que nos lleva de nuevo a pedir se busque cómo terminar políticamente con la guerra y cómo llegar a un diálogo para encontrar caminos de solución concertada.

Hablamos también de una guerra, en la cual ya no se solventan sólo problemas nacionales, sino también intereses de grandes potencias, especialmente el interés de Estados Unidos por no ver complicada su seguridad nacional.

Desde luego, no es posible la recuperación y, menos aún, la reconstrucción sin la terminación de la guerra y una terminación política, no violenta. Ni tampoco sin una incipiente democratización.

No es fácil el diálogo. Ni siquiera todos están convencidos todavía de cuán necesario es. No es fácil arbitrar modos realistas de iniciarlo y menos fácil es aún el ir dando pasos, que supongan arreglos objetivos. Pero ese es el camino. Y ese camino podrá despejarse de obstáculos, si se tienen en cuenta dos principios: que las fuerzas extranjeras salgan del problema salvadoreño y que todas las fuerzas salvadoreñas participen en la búsqueda y realización de la solución. No a la intervención y sí a la autodeterminación; no a los de fuera hoy empeñados en intervenir en nuestros asuntos y sí a los de dentro a quienes se les impide aportar su razón y exigir su derecho. Ni Washington ni La Habana tienen por qué ser quienes determinen lo que debemos hacer los salvadoreños. Pero lo que no se puede admitir es llamar intervencionismo marxista a la presunta ayuda impulsada desde Cuba y no llamar intervencionismo imperialista a la evidente ayuda militar y al comprobado influjo hegemónico y determinante de la Administración Reagan en El Salvador. Es necesario un nacionalismo sano: No somos una isla en el mundo, evidentemente, pero somos un país, una nación, un pueblo, una patria. Y esto legitima el que todos los salvadoreños y sólo los salvadoreños determinen lo más autónomamente posible lo que necesitan y lo que quieren.

Para encontrar razonablemente lo que el pueblo salvadoreño necesita y quiere se debe tener delante de los ojos lo sucedido en estos últimos años, especialmente desde el 15 de octubre hasta hoy, período en el cual han salido a la superficie los problemas y las soluciones que se venían gestando durante el último decenio. Es necesario hacer un balance para no repetir crasos errores que han llevado a esta situación agónica; crasos errores en las actitudes, en los diagnósticos, en las soluciones emprendidas, en los proyectos.

Queriendo ayudar en esta tarea de hacer balance se ofrece a los lectores este número de ECA. En él se desarrollan nuevos análisis sobre la economía, sobre las fuerzas políticas, militares, religiosas y empresariales, sobre la guerra y los derechos humanos y sobre los medios de comunicación. Se dan datos y se adelantan interpretaciones. Significan en su conjunto una llamada a la reflexión y al estudio. Tras estos largos meses de experiencias tan dolorosas no sería justo empeñarse en posiciones anteriores, como si nada hubiera pasado. Ya no hay posiciones pasadas que sigan siendo válidas, si no se someten a crítica y actualización. La situación es muy diferente a lo que era dos años atrás.

Es cierto, que el problema básico sigue siendo el mismo: una situación de inaceptable injusticia estructural, coyunturalmente agravada por el conflicto. Y sobre esa situación se alzan firmes los antagonistas principales, a quienes la lucha ha fortalecido: quienes quieren que todo siga lo mismo en lo fundamental y quienes quieren que las cosas cambien fundamentalmente, son los anti-revolucionarios y los revolucionarios. Entre ellos existen otros sectores amplios, más numerosos, pero menos fuertes. Los dos años y medio recién pasados han demostrado que el antagonismo principal ha de tomar forma distinta a la guerra y la represión; han demostrado que es menester dar un paso adelante, el cual no puede llamarse síntesis de contrarios, pero sí una nueva etapa, donde las contradicciones no se den ya en la misma forma y los modos de contradecirse y de combatirse sean distintos de los empleados hasta el momento. Las contradicciones continúan dándose objetivamente y, con ellas, los intereses subjetivos, y no pueden desaparecer hasta generar cambios fundamentales en la estructura socio-económica y política. No obstante, el modo del enfrentamiento debe ser distinto, debe nacionalizarse, debe democratizarse, debe humanizarse. Sólo así podrá hablarse de una reconstrucción nacional necesaria y urgente como la lluvia de mayo para empezar la siembra y para tener pronto alimento, justicia y libertad para todos, especialmente para las mayorías populares.

Junio de 1982